OFICIO No. CEDH/P/MAZ/001940
EXPEDIENTE No.: CEDH/IV/178/2011
QUEJOSO: N1
RESOLUCIÓN: ACUERDO DE
CONCILIACIÓN No.
7/2012

LIC. ALEJANDRO HIGUERA OSUNA,
Presidente Municipal,
Mazatlán, Sinaloa

Por el presente expreso a usted que el día 1° de junio del año 2011 el señor N1, Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad denominada “****”, presentó escrito de queja por violaciones a derechos humanos cometidas en perjuicio de su persona y un grupo de familias agremiadas a la citada sociedad, consistentes en las agresiones físicas de que fueron objeto por parte de elementos policíacos de la Dirección de Seguridad Pública de Mazatlán, Sinaloa.

Agregando en la narración de hechos, que éstos se suscitaron el día 30 de mayo cuando se encontraban reunidos en las instalaciones del Ayuntamiento de Mazatlán a fin de recibir apoyos de bienestar social, ya que previo a ese día, el 28 para ser precisos, sostuvieron una reunión con el Director de Bienestar Social del Ayuntamiento de Mazatlán, quien les manifestó que los apoyos solicitados estaban listos y que les serían entregados ese día 30 de mayo en las instalaciones del Ayuntamiento.

Asimismo manifiesta que estuvieron en dicho lugar desde las 09:00 hasta las 15:00 horas sin ser atendidos y ante la desesperación por el tiempo transcurrido optaron por ingresar a la recepción de las oficinas de la Presidencia con el único propósito de insistir en ser recibidos; sin embargo, no lo lograron.

Al parecer, el hecho de ingresar a dicha oficina molestó a una persona del sexo masculino que se encontraba en el lugar de nombre N2, con cargo de

Subdirector de Policía Municipal de Mazatlán, Sinaloa, quien los agredió físicamente y que además arrojó gas lacrimógeno a las personas que se encontraban en el lugar, lo que ocasionó que una de las personas que ahí se encontraba, la señora N3 al inhalar el gas convulsionara ya que padece de ataques epilépticos.

Durante la investigación se practicaron las siguientes diligencias:

1. Con fecha 1° de junio de 2011, se recepcionó el testimonio al señor N4, sobre los hechos narrados en el escrito de queja, quien manifestó que una señora había sido golpeada por el Subdirector Operativo de Policía Municipal de Mazatlán con el radio transmisor que portaba.

2. Con fecha 1° de junio de 2011, se recepcionó el testimonio a la señora N5, quien narró su versión de los hechos, coincidiendo con los anteriores, observándose que a diferencia del señor N4 y del señor N1, agrega que el elemento policiaco les decía que este último en compañía de otras cuatro personas eran las que serían atendidas por el Presidente Municipal, sin embargo nunca sucedió.

3. Con oficio número CEDH/V/MAZ/001044 de fecha 2 de junio de 2011, se solicitó información al Director de Seguridad Pública Municipal de Mazatlán respecto los hechos narrados en el escrito de queja.

4. Con fecha 3 de junio de 2011, se recepcionaron los testimonios de las señoras N6 y N3, mismos que coincidieron en su dicho con los hechos expuestos en la queja.

La señora N3 agregó a su testimonio copia simple de receta médica individual expedida por el Instituto Mexicano del Seguro Social, de fecha 13 de diciembre de 2010 en la que se le indica tomar el medicamento denominado Fenitoína, es un antiepiléptico de uso común.

5. Con oficio número 1849/2011 de fecha 3 de junio de 2011 el Secretario de Seguridad Pública, rindió el informe solicitado en el cual manifestó que el elemento policiaco N2 con cargo de Subdirector Operativo de la Policía Preventiva Municipal se encontraba el día de los hechos asignado en el área de Presidencia, precisamente por la naturaleza de su cargo y se encuentra en todas las áreas de la ciudad.

6. Con oficio número CEDH/VG/MAZ/001286 de fecha 29 de junio de 2011, se notificó al señor N1 del contenido del informe rendido por el Secretario de Seguridad Pública de Mazatlán, siendo éste contradictorio a lo manifestado por él en su escrito de queja por lo que se le solicitó aportara mayores elementos de prueba, particularmente del video y fotografías a las que hacía referencia en su escrito de queja.

7. Con escrito de fecha 13 de julio de 2011, firmado por el señor N1, quejoso y Presidente del Consejo de Administración denominado “****”, el señor N4 y N5, Secretario y Vocal Financiero, respectivamente, adjuntaron entre otras cosas el video de los acontecimientos del día 30 de mayo de 2011.

8. En virtud de lo anterior con oficio número CEDH/VG/MAZ/001561 de fecha 9 de agosto de 2011, de nueva cuenta se solicitó información al Titular de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Mazatlán, Sinaloa sobre los hechos, particularmente lo concerniente a la utilización de gas lacrimógeno que prohibidamente arrojaron a las personas que se encontraban en la recepción de la Presidencia Municipal de Mazatlán, Sinaloa.

9. Con oficio número 2514/2011 de fecha 11 de agosto de 2011, se recibió la información por parte del Titular de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Mazatlán, relacionada con lo descrito en el punto que antecede, en el cual manifestó entre otras cosas que efectivamente el Subdirector Operativo N2 el día de los hechos 30 de mayo de 2011 arrojó al aire gas lacrimógeno.

Si bien es cierto, el hecho de que se justifique el uso del gas lacrimógeno para recobrar el orden en las manifestaciones, lo que también es cierto es que el hecho de llegar a la desesperación por parte de los agraviados fue las horas de espera para ser atendidos sin haberlo logrado, no obstante a que se tenía una cita previa ante el Director de Bienestar Social.

Por lo anterior del análisis lógico-jurídico llevado a cabo sobre las constancias que integran el expediente que ahora se resuelve, este organismo de derechos humanos logró acreditar actos violatorios de derechos humanos, consistentes en la seguridad personal e indebida prestación del servicio público por parte del elemento policiaco N2.

Lo anterior se advierte de las constancias que integran el expediente que ahora se resuelve y de manera particular de la probanzas otorgadas por el quejoso y los testimonios de los agraviados que fueron afectados por la inhalación del gas lacrimógeno, ya que fue necesario la asistencia de paramédicos de Cruz Roja delegación Mazatlán.

Primeramente es necesario anotar la violación al derecho humano a la integridad y seguridad personal de que fueron objeto los agraviados, señalando que la seguridad de la integridad física del ser humano es la más elemental exigencia del gobernado, siendo obligación del poder público alejar y protegerlo de cualquier violencia que ponga en peligro su integridad, ya fuera de los propios servidores públicos o de terceros.

La seguridad física del hombre es uno de los derechos más antiguos, constituye el derecho a conservar su integridad psicosomática, ajena a torturas, violencia, lesiones o cualquier otro tipo de lesión externa.

Así entonces, el derecho a la seguridad personal implica el reconocimiento de la dignidad inherente al ser humano, y por tanto, de la preservación física, psíquica y moral de toda persona, la cual se traduce en el derecho a no ser víctima de ningún dolor o sufrimiento físico, psicológico o moral.

Bajo tales observaciones resulta dable concluir que la conducta del agente N2, fue contraria a las funciones que la legislación les obliga a observar, de tal manera que con ello se violentaron las siguientes disposiciones legales:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

Artículo 21. Párrafo noveno, establece:

“La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución.”

Por otro lado, el hecho de que los actos o hechos hayan sido imputados a servidores públicos, hace potenciar su grado de afectación, ya que deviene de quien en principio es responsable de velar por la dignidad y justicia de todo individuo.

Declaración Universal de los Derechos Humanos:

“Artículo 3

Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”.

Convención Americana sobre Derechos Humanos:

“Artículo 5. Derecho a la integridad personal.

1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral”.

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos:

“Artículo 9.1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales.”

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre

“Artículo I.
Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.”

Con base en lo anterior, se advierte a todas luces que la prestación que otorgan los elementos policíacos encargados de guardar y hacer guardar el orden, y particularmente el Suboficial N2, deja mucho que desear del desempeño de dicho funcionario público, ya que para que constituya un verdadero mecanismo del funcionamiento de la administración pública, debe garantizársele a toda persona el derecho del cumplimiento exacto de la ley y el goce efectivo de sus derechos.

Ya que si bien es cierto, las personas agraviadas decidieron entrar al área de Presidencia fue porque tenían aproximadamente más de seis horas de estar esperando para ser atendidas, y no acudieron por decisión propia, sino que previo a ello se les otorgó la fecha en que serían atendidos para entregarles los beneficios de bienestar social, optando por ello acercarse a la recepción del área de Presidencia; sin embargo, no lograron ser escuchados, lo que ocasionó perder el control y para ello les arrojaron gas lacrimógeno ocasionando la intoxicación de los agraviados.

Ante lo anterior es necesario hacer referencia al contenido del artículo 3° de la Ley General que establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que claramente dispone que de conformidad con el artículo 21 Constitucional, la seguridad pública es la función a cargo del Estado, el cual

tiene como fines, entre otros, salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos.

En otro orden de ideas es sabido que la autoridad sólo puede hacer o dejar de hacer aquello expresamente establecido en la norma, en tanto que un particular, puede hacer todo aquello que desee, siempre y cuando no esté prohibido por la ley.

El pasado 26 de mayo de 2008, nuestra Constitución local fue reformada mediante la adición de un Título I Bis en cuyo texto se obliga a toda autoridad local a ser respetuosos con los derechos humanos, además de vincularlos a ellos; situación que no fue considerada por parte del funcionario público N2, como autoridad responsable.

Todo lo anotado con anterioridad contraviene los siguientes ordenamientos jurídicos, tanto nacionales como internacionales, mismos que a continuación se transcriben.

Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa:

“Artículo 2. Para los efectos de esta ley, se entiende por seguridad pública la función a cargo del Estado y los Municipios, tendiente a salvaguardar la integridad, los bienes y los derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos.

.....

Las instituciones encargadas de la seguridad pública regirán su actuación bajo los principios de legalidad, protección social, eficiencia, eficacia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, y cualquier actividad fuera de estos principios, será sancionada de conformidad con la Ley.”

De igual manera, también se evidencia que el agente N2 de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Mazatlán, incumplió con lo dispuesto por el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, que en sus artículos 1º y 2º contemplan:

“Artículo 1o. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley cumplirán en todo momento los deberes que les impone la ley, sirviendo a su comunidad y protegiendo a todas las personas contra actos ilegales, en consonancia con el alto grado de responsabilidad exigido por su profesión.”

Artículo 2o. En el desempeño de sus tareas, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley respetarán y protegerán la dignidad humana y mantendrán y defenderán los derechos humanos de todas las personas.”

Por otro lado el derecho a la seguridad jurídica traducida en una prestación indebida del servicio público consiste en cualquier acto u omisión que cause la negativa, suspensión, retraso o deficiencia de un servicio público por parte de un servidor público que implique el ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión.

Que en un régimen constitucional como el nuestro, la valoración jurídica del proceder de un servidor público debe hacerse a partir de lo que la ley fundamental estatuya en cuanto a su competencia, análisis que debe ser complementado con lo que la legislación secundaria prevenga con relación a sus atribuciones, lo cual más adelante, en forma sucesiva, examinaremos los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los diferentes cuerpos normativos de la legislación secundaria que regulan el actuar de todo servidor público.

Con tales acciones y omisiones por parte de los funcionarios públicos señalados, indudablemente transgredieron lo dispuesto en los siguientes ordenamientos.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

“Artículo 108. Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Título se reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial Federal y del Poder Judicial del Distrito Federal, los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal o en la Administración Pública Federal o en el Distrito Federal, así como a los servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones. Las Constituciones de los Estados de la República precisarán, en los mismos términos del primer párrafo de este artículo y para los efectos de sus responsabilidades, el carácter de servidores públicos de quienes desempeñen empleo, cargo o comisión en los Estados y en los Municipios.”

Artículo 113. Las leyes sobre responsabilidades administrativas de los servidores públicos, determinarán sus obligaciones a fin de salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, y eficiencia en el desempeño de sus funciones, empleos, cargos y comisiones; las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que incurran, así como los procedimientos y las autoridades para aplicarlas.

Dichas sanciones, además de las que señalen las leyes, consistirán en suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas, y deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos obtenidos por el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por sus actos u omisiones a que se refiere la fracción III del artículo 109, pero que no podrán exceder de tres tantos de los beneficios obtenidos o de los daños y perjuicios causados.”

Constitución Política del Estado de Sinaloa:

“Artículo 130. Para los efectos de las responsabilidades contenidas en este Título, se entiende por servidor público toda persona física que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en alguno de los tres poderes del Gobierno del Estado, en los Ayuntamientos, así como en los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos del Estado y Municipios en los Ayuntamientos y organismos e instituciones municipales.

Todo servidor público será responsable de los actos u omisiones oficiales en que incurra y que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho, independientemente de la jerarquía, denominación y origen del cargo. Se concede acción popular para denunciar los delitos y faltas a que se refiere este Título, bajo la más estricta responsabilidad del denunciante y mediante la presentación de elementos de prueba.”

Artículo 130. Para los efectos de las responsabilidades contenidas en este Título, se entiende por servidor público toda persona física que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en alguno de los tres poderes del Gobierno del Estado, en los Ayuntamientos, así como en los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos del Estado y Municipios en los Ayuntamientos y organismos e instituciones municipales”.

Todo servidor público será responsable de los actos u omisiones oficiales en que incurra y que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho, independientemente de la jerarquía, denominación y origen del cargo. Se concede acción popular para denunciar los delitos y faltas a que se refiere este Título, bajo la más estricta responsabilidad del denunciante y mediante la presentación de elementos de prueba.”

Numerales de los que claramente se desprende que servidor público es toda persona física que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en alguno de los tres poderes del Gobierno, así como en los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos del Estado y Municipios en los Ayuntamientos y organismos e instituciones municipales.

Aunado a lo anterior y de lo razonado en el cuerpo de la presente resolución, se deduce que las conductas atribuidas al servidor público de referencia pueden ser constitutivas de responsabilidad administrativa, de conformidad con lo previsto por los artículos 2º, 3º y 15, fracción I de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado.

Ordenamientos de los que se desprende la obligatoriedad que tienen los servidores públicos de conducirse en el desempeño de sus funciones con legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia y respeto a los derechos humanos y, en contrapartida, el actuar fuera de estos supuestos necesariamente implica un exceso o deficiencia del empleo, cargo o comisión encomendado.

También se desprende la obligatoriedad que tienen los servidores públicos de conducirse en el desempeño de sus funciones con legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia y respeto a los derechos humanos, y en contrapartida, el actuar fuera de estos supuestos necesariamente implica un exceso o deficiencia del empleo, cargo o comisión encomendado, el cual deberá ser sujeto del inicio de una investigación administrativa de parte del órgano de control interno de la institución respectiva.

En razón de lo anterior, con el propósito de promover prácticas que redunden en una mejor protección de los derechos humanos, así como a fin de dar una solución inmediata a la problemática que se estudia de conformidad con lo estatuido por los artículos 102, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 77 Bis de la Constitución Política del Estado; 7º, fracción VIII y 43 de la Ley Orgánica de la Comisión Estatal de Derechos

Humanos; 85, 86, 87, 88 y 89 de su Reglamento Interior, este organismo formula a usted señor Presidente Municipal de Culiacán, el siguiente:

ACUERDO DE CONCILIACIÓN

ÚNICO. Se dé vista al órgano de Control Interno y se inicie el procedimiento administrativo en contra del elemento policiaco N2, por las consideraciones descritas en el presente documento y, en su caso, se finque responsabilidad y se apliquen las sanciones correspondientes, así como informar a esta Comisión Estatal el trámite que se realice desde su inicio hasta la resolución correspondiente.

De aceptarse el Acuerdo de Conciliación y durante los cinco días hábiles siguientes ese H. Ayuntamiento no cumple totalmente con lo estipulado en el mismo, el agraviado podrá hacerlo del conocimiento de este organismo, para que dentro de las setenta y dos horas siguientes el expediente del caso se reabra y determinar las acciones que correspondan de conformidad con lo dispuesto por el artículo 87 del Reglamento Interior de la Ley Orgánica de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

De no aceptarse dicho Acuerdo, la consecuencia inmediata será la preparación del proyecto de recomendación correspondiente, tal y como lo establece el numerario 88, del citado ordenamiento legal.

Dada la naturaleza jurídica del presente Acuerdo de Conciliación, de conformidad con lo estatuido por el artículo 87, del Reglamento Interior de la Ley Orgánica de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, cuenta con un plazo de cinco días hábiles, computable a partir del día siguiente de aquél en que se haga la notificación respectiva, para que manifieste a esta CEDH si acepta el Acuerdo de Conciliación, solicitándosele expresamente que, en caso de que no lo acepte, motive y fundamente la no aceptación, esto es, que exponga una a una sus contra argumentaciones, de modo tal que se demuestre que los razonamientos

expuestos por este organismo estatal carecen de sustento, adolecen de congruencia o, por cualquiera otra razón, resulten inatendibles.

Todo ello en función de la obligación de todos de observar las leyes y, específicamente, de su protesta de guardar la Constitución, lo mismo la General de la República que la del Estado, así como las leyes emanadas de una y de otra. Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

Atentamente
Culiacán Rosales, Sin., a 30 de julio de 2012
El Presidente

DR. JUAN JOSÉ RÍOS ESTAVILLO

C.c.p. Sr. N1, quejoso. Para su conocimiento.

C.c.p. Expediente.

C.c.p. Minutario.